



## **SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL**

**Proceso:** ORDINARIO LABORAL  
**Radicado:** 05001-31-05-008-2020-00299-01 (O2-22-218)  
**Demandante:** JOSÉ RAFAEL ECHAVARRÍA VALENCIA  
**Demandada:** COLPENSIONES E.I.C.E.  
**Procedencia:** JUZGADO OCTAVO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN  
**Providencia:** SENTENCIA No.222 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2022  
**Asunto:** PENSIÓN DE VEJEZ – RÉGIMEN DE TRANSICIÓN – LIQUIDACIÓN

En Medellín, a los treinta y un (31) días del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL, conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-008-2020-00299-01 (O2-22-218), promovido por **JOSÉ RAFAEL ECHAVARRÍA VALENCIA** contra **COLPENSIONES E.I.C.E.**, con miras a resolver los recursos de apelación impetrados por ambas partes, y el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de COLPENSIONES E.I.C.E., respecto de la sentencia que selló la primera instancia, proferida el 06 de junio de 2022 por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, “*Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones*”, se adopta la decisión correspondiente mediante presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

### **1. ANTECEDENTES**

El señor JOSÉ RAFAEL ECHAVARRÍA VALENCIA, actuando por intermedio de apoderado judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de COLPENSIONES E.I.C.E. en orden a que se declare que para el reconocimiento de la pensión de vejez debió aplicársele el

Decreto 758 de 1990, y de consiguiente, una tasa de reemplazo de 90%, y a obtener el reconocimiento y pago del mayor valor adeudado respecto de las mesadas deficitariamente canceladas, junto con los intereses de mora, o en subsidio, la indexación de las condenas, y las costas del proceso.

Como fundamento fáctico de la acción, expuso que fue pensionado por vejez mediante la Resolución 8428 del 09 de abril de 2012, a partir del 01 de julio de 2011, con una mesada inicial de \$1.515.476, liquidada sobre 1.527 semanas, de las cuales, 702,86 corresponden al tiempo laborado al servicio del sector público, y 824,57 fueron cotizadas al ISS, un IBL de \$2.045.453, y una tasa de reemplazo del 74,09%, aplicándose para el efecto las previsiones de la Ley 797 de 2003; que el 22 de diciembre de 2016 solicitó el reajuste de la prestación, bajo las prerrogativas de la Ley 33 de 1985, petición que fue desestimada a través de la Resolución GNR 3755 del 06 de enero de 2014, acto administrativo que recurrió el 24 de febrero de 2017, y que fue revocado mediante la Resolución SUB 2036 del 07 de marzo de 2017, y en su lugar, se reajustó el monto de la pensión de vejez, a partir del 22 de diciembre de 2013, con una mesada de \$1.647.371, liquidada sobre 1.550 semanas cotizadas, un IBL de \$2.196.494, y una tasa de reemplazo del 75%, aplicando para el efecto las previsiones de la Ley 71 de 1988, decisión que fue confirmada a través de la Resolución DIR 3012 del 06 de abril de 2017.

Informó que el 20 de marzo de 2019 le solicitó a COLPENSIONES E.I.C.E. el reajuste de la pensión de vejez, aplicando para el efecto una tasa de reemplazo del 90%, conforme a lo establecido en el Decreto 758 de 1990, petición que fue desestimada mediante la Resolución SUB 250680 del 13 de septiembre de 2019, arguyendo que el citado precepto normativo no admite la sumatoria de tiempos públicos y privados, decisión que fue recurrida en apelación el 08 de octubre de 2019, y que fue confirmada a través de la Resolución DPE 11544 del 26 de agosto de 2020, con el argumento de que cómo adquirió el estatus de pensionado desde el 25 de octubre de 2010, no le son aplicables las reglas jurisprudenciales previstas en la Sentencia SU-769 de 2014.

### **1.1. Trámite de Primera Instancia**

La demanda se admitió el 12 de enero de 2021 (doc.02, carp.01), y se notificó a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado el 25 de enero de 2022 (doc.07, carp.01), y a la Procuradora Judicial para los Asuntos del Trabajo y de la Seguridad Social el 28 de enero de 2022 (doc.07, carp.01).

COLPENSIONES E.I.C.E. presentó contestación el 14 de febrero de 2022 (doc.04, carp.01), escrito en el que admitió los hechos narrados en el libelo genitor, y en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda considerando que el demandante solo cuenta con 879 semanas efectivamente cotizadas, por lo que no acredita los requisitos exigidos en el Decreto 758 de 1990, que la citada normativa no posibilita la sumatoria de tiempos públicos sin cotizaciones al ISS, que la única normativa anterior a la Ley 100 de 1993 que permitía dicha sumatoria era la Ley 71 de 1988, que solo establece como tasa de reemplazo del 75% del IBL,. Consecuentemente, propuso las excepciones de mérito que denominó improcedencia del cambio de régimen pensional para la aplicación del Decreto 758 de 1990, inexistencia de la obligación de reajustar la mesada pensional con una tasa de reemplazo del 90%, inexistencia de la obligación de reconocer intereses moratorios, improcedencia de la indexación, prescripción, imposibilidad de condena en costas, y compensación.

## **1.2. Sentencia de Primera Instancia**

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 06 de junio de 2022 (docs.10-14, carp.01) por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia en la que se declaró que al señor JOSÉ RAFAEL ECHAVARRÍA VALENCIA le asistía el derecho al reajuste de la pensión de vejez, conforme a lo establecido en el Decreto 758 de 1990; se condenó a COLPENSIONES E.I.C.E. a reconocer y pagar en favor del demandante la suma de \$49.048.768 por concepto de reajuste pensional liquidado entre el 23 de diciembre de 2013 y el 31 de mayo de 2022, suma sobre la que autorizó descontar el valor reconocido mediante la Resolución 2036 de 2017 (\$1.576.961), y los aportes para el Sistema General de Salud; se ordenó a COLPENSIONES E.I.C.E. seguir reconociendo en favor del actor, la suma de \$2.792.389 por concepto de mesada pensional, a partir del 01 de junio de 2022, sin perjuicio de los incrementos y descuentos de Ley; condenó a COLPENSIONES E.I.C.E. a indexar las sumas adeudadas por concepto de retroactivo pensional, y condenó en costas a COLPENSIONES E.I.C.E. en favor del demandante.

Para sustentar su decisión, el cognoscente de primer grado argumentó que la jurisprudencia nacional admite la sumatoria de tiempos públicos y privados, bajo el amparo del Decreto 758 de 1990, no solo para efectos de reconocer la pensión de vejez, sino también para liquidar una mesada pensional más favorable; que el mayor valor causado sobre las mesadas pensionales canceladas con anterioridad al 23 de diciembre de 2013, por haberse reclamado el reajuste de la prestación el 22 de diciembre de 2016; y que el reconocimiento de los intereses de mora no es procedente por haberse reconocido la indexación pretendida.

### **1.3. Recurso de Apelación**

La decisión antes descrita fue objeto del recurso de alzada por el gestor judicial del señor JOSÉ RAFAEL ECHAVARRÍA VALENCIA (minuto 36:50, doc.12, carp.01), a propósito de que se revoque parcialmente la sentencia de primer grado, en cuanto reconoció la indexación de las condenas, y en su lugar, se ordene el reconocimiento de los intereses moratorios deprecados, arguyendo que la jurisprudencia que admite la sumatoria de tiempos públicos y privados bajo el amparo del Decreto 758 de 1990 se unificó desde el año 2020, y que los precitados intereses tienen una naturaleza resarcitoria y no sancionatoria, por lo que también proceden tratándose del pago deficitario de la prestación pensional.

Por su parte, la poderhabiente judicial de COLPENSIONES E.I.C.E. impetró el recurso de apelación (minuto 40:30, doc.12, carp.01), con el propósito de que se revoque íntegramente la sentencia de primera instancia, y en su lugar, se absuelva a su prohijada de las pretensiones incoadas, aliviando que el demandante no acredita las 1.250 semanas que para el efecto se exigen en el Decreto 758 de 1990.

### **1.4. Grado Jurisdiccional de Consulta**

Teniendo en cuenta que la decisión adoptada en primera instancia fue adversa a los intereses COLPENSIONES E.I.C.E., la sentencia será examinada en favor de la misma entidad, bajo el grado jurisdiccional de consulta, en los aspectos en los que no fue objeto de alzada.

### **1.5. Trámite de Segunda Instancia**

Los recursos de apelación y el grado jurisdiccional de consulta se admitieron el 28 de junio de 2022 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del 05 de julio del mismo año (doc.03, carp.02), se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en la Ley 2213 de 2022, presentaran alegatos de conclusión por escrito; sin embargo, ninguna de las partes presentó alegaciones finales.

## **2. ANÁLISIS DE LA SALA**

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por el señor JOSÉ RAFAEL ECHAVARRÍA VALENCIA y COLPENSIONES E.I.C.E., advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del CPTSS, el estudio del fallo

impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de la alzada; a la par de surtirse la revisión de la sentencia en el grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES E.I.C.E., en los puntos que no fueron materia de alzada.

## **2.1. Problema Jurídico**

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a determinar si al señor JOSÉ RAFAEL ECHAVARRÍA VALENCIA le asiste el derecho al reajuste de la pensión de vejez, con una tasa de reemplazo del 90%, bajo la égida de las previsiones contenidas en el Decreto 758 de 1990, y teniendo en cuenta tanto los periodos laborados al servicio del sector público sin cotizaciones al ISS, como las semanas cotizadas en el sector privado. En caso afirmativo, la Sala también se ocupará de establecer si al demandante le asiste el derecho al reconocimiento de los intereses de mora deprecados por el pago deficitario pretense de las mesadas pensionales canceladas.

## **2.2. Sentido del Fallo**

La Sala confirmará la decisión de primer grado, en cuanto declaró que al señor JAIRO DE JESÚS ARDILA VARGAS le asiste el derecho a que la pensión de vejez reconocida sea liquidada en los términos previstos en el Decreto 758 de 1990, y en cuanto negó el reconocimiento de los intereses de mora, siendo que el reajuste de la prestación dispensado se deriva del desarrollo jurisprudencial sobre la materia; pero la modificará respecto de la fecha en la que la *a quo* entendió interrumpido el término de prescripción, y en su lugar, se declarará que la única petición que tuvo la vocación de interrumpirla, fue aquella en la que el actor determinó específicamente cuál es el derecho pretendido, y a su vez, extendiendo la condena en concreto.

## **2.3. Solución de los Problemas Jurídicos Planteados**

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la controversia planteada, debe señalarse que no existe discusión sobre los siguientes presupuestos fácticos: que el señor JOSÉ RAFAEL ECHAVARRÍA VALENCIA laboró al servicio del MUNICIPIO DE MEDELLÍN, entre el 23 de febrero de 1976 y el 25 de mayo de 1978, al servicio del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, entre el 22 de mayo de 1978 y el 02 de noviembre de 1980, y al servicio de los FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, entre el 16 de agosto de 1983 y el 17 de julio de 1992, con un total de 702,86 semanas (4.920 días) al servicio del sector público sin cotizaciones al ISS (págs.19-22, 30-38, 39-48, doc.01, carp.01), que cotizó 879 semanas (6.153 días) al Sistema General de Pensiones (págs.14-22, doc.04, carp.01), y que fue pensionado por vejez, mediante la Resolución 008428 del 09 de abril de 2012, a partir del 01 de julio de 2011, con una mesada inicial de \$1.515.476, liquidada sobre un IBL de \$2.045.453, y con una tasa de reemplazo del 74,09%, prestación que fue reconocida y liquidada bajo los parámetros de la Ley 100 de 1993 (págs.19-22, doc.01. carp.01).

Así mismo, se encuentra acreditado que el 22 de diciembre de 2016, el actor solicitó el reajuste de la pensión de vejez “... de acuerdo a la Ley 33 de 1975 [...], porque el promedio del salario base del último año laborado en el Departamento de Antioquia y cotizado al ISS fue de \$4.044.877”, petición que fue denegada a través de la Resolución GNR 3755 del 06 de enero de 2017, bajo el argumento de que el afiliado no acreditaba los 20 años de servicio en el sector publico exigidos por la normativa en cita (págs.29-29, doc.01, carp.01), decisión que fue recurrida el 24 de febrero de 2017, y revocada mediante la Resolución SUB 2036 del 07 de 2017, acto administrativo en el que se reajustó la mesada pensional, a partir del 22 de diciembre de 2013, por valor de \$1.647.371, liquidada sobre 1.550 semanas cotizadas, un IBL de \$2.196.494, y una tasa de reemplazo del 75%, bajo el amparo de la Ley 71 de 1988, por ser la normativa más favorable para el afiliado (págs.30-38, doc.01, carp.01), decisión que, pese de no ajustarse a lo peticionado por el demandante, fue confirmada a través la Resolución DIR 3012 del 06 de abril de 2017 (págs.39-48, doc.01, carp.01).

En igual sentido, obra constancia de que el 20 de marzo de 2019 (págs.49-55, doc.01, carp.01), el señor JOSÉ RAFAEL ECHAVARRÍA VALENCIA solicitó el reajuste de la pensión de vejez “... En

aplicación de la ley y de la doctrina constitucional, se asuma por parte de Colpensiones que la tasa de reemplazo que debe aplicarse para establecer el monto de la mesada pensional del señor Echavarría Valencia corresponde al 90% de su ingreso base de liquidación", petición que fue negada a través de la Resolución SUB 250680 del 13 de septiembre de 2019, bajo el razonamiento de que la Sentencia SU-769 de 2014 no tiene efectos retroactivos (págs.56-66, doc.01, carp.01), decisión que fue recurrida el 08 de octubre de 2019 (págs.67-72, doc.01, carp.01), pero que fue confirmada mediante la Resolución DPE 11544 del 26 de agosto de 2020, tras cogitar que *"... como quiera que el estatus pensional del peticionario es el 25 de octubre de 2010, es decir, con anterioridad al 16 de octubre de 2014, no es posible tener en cuenta los tiempos de servicio público, para la aplicación de la tasa de remplazo bajo los parámetros del Decreto 758 de 1990"* (págs.80-87, doc.01, carp.01).

### **2.3.1. La Pensión de Vejez**

El Sistema General de Seguridad Social es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad (preámbulo de la Ley 100 de 1993); de consiguiente, el Sistema General de Pensiones fue a su vez concebido para garantizarle a la población colombiana el amparo ante las contingencias de vejez, invalidez y muerte, reconociendo para ello una prestación económica periódica -pensión-, pagada por la entidad administradora de pensiones del régimen al que se hubiere vinculado el afiliado, previo al cumplimiento de los requisitos exigidos por el régimen que le resulte aplicable a cada afiliado.

**2.3.1.1. De la causación de la pensión de vejez:** Los afiliados al régimen de prima media con prestación definida que pretendan acceder al reconocimiento de la pensión de vejez, debían acreditar para el año 2010, una edad mínima de 55 años, las mujeres, o de 60 años, los hombres, y una densidad de semanas igual o superior a las 1.175 (artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003); pese a ello, los afiliados que para el 01 de abril de 1994, contasen con 15 años de servicios, 750 semanas cotizadas que corresponden a 771,42 semanas cotizadas (CSJ SL1123-2021, SL3787-2021), o 35 años de edad en el caso de las mujeres, o 40 años de edad en el caso de los hombres, podían pensionarse con el número de semanas de cotización y el monto o tasa de reemplazo descritos en el régimen anterior (artículo 36 de la Ley 100 de 1993), régimen transicional que solo se extendió

hasta el 31 de julio de 2010, salvo para los beneficiarios que, al 29 de julio de 2005, hubieren cotizado 750 semanas, o su equivalente en tiempo de servicios, para quienes el régimen de transición se mantuvo vigente hasta el 31 de diciembre del año 2014 (parágrafo transitorio 4º del Acto Legislativo 001 de 2005); con todo ello, conviene memorar que en el asunto puesto a consideración de la Sala no se discute que el señor es beneficiario de la transición pensional.

El régimen legal anterior aplicable hace referencia a las condiciones que regulaban el acceso al reconocimiento de la pensión de vejez con anterioridad a la entrada vigencia de la Ley 100 de 1993, y para establecer cuál es el régimen anterior aplicable para el caso que nos ocupa, bastaría con identificar cuáles eran las condiciones que regulaban el derecho al reconocimiento de la pensión de vejez de los afiliados que para el 01 de abril de 1994 se encontraban vinculados laboralmente al sector público, y habían realizado cotizaciones a través del sector privado, advirtiéndose que si se hiciera una abstracción de la Ley 100 de 1993, la situación del afiliado que se encuentre en la hipótesis planteada estaría regulada, en principio, por la Ley 71 de 1988, la cual permite acumular los aportes sufragados en entidades de previsión social, el tiempo de servicio en el sector público, y las cotizaciones efectuadas al ISS para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez; siendo relevante memorar que, aunque la jurisprudencia laboral pregonaba que bajo la égida de la Ley 71 de 1988 no era posible acumular tiempos de servicio sin aportes, con aquellos efectivamente cotizados al ISS, lo cierto es que, tal criterio varió a partir de la sentencia CSJ SL4457-2014, con la que ahora se permite su contabilización.

Ahora bien, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia también sostenía que con arreglo al régimen pensional del Decreto 758 de 1990, solo era posible computar semanas cotizadas exclusivamente al Instituto de Seguros Sociales por cuanto, a la luz de sus reglamentos, no existía una sola disposición que autorizara la sumatoria de semanas laboradas en el sector público, sufragadas a cajas, fondos o entidades de previsión social o, simplemente, no cotizadas. De igual modo, había considerado que el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, prescriptor del régimen de transición, si bien, en principio, alude a las pensiones obtenidas en aplicación del régimen previsto en la Ley 100 de 1993, lo cierto es que dicha referencia corresponde a la pensión de vejez instituida en el nuevo sistema de seguridad social, siendo esencialmente una iteración de la fórmula consagrada en el parágrafo 1º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (CSJ SL del 04-11-2004, radicado 23611, rememorada entre muchas otras, en las sentencias CSJ SL del 10-03-2009, radicado 35792, CSJ SL del 17-05-2011, radicado 42242, CSJ SL, del 06-09-2012, radicado 42191, CSJ SL4461-2014, CSJ SL1073-2017, CSJ SL517-2018, CSJ SL4010-2019 y CSJ SL5614-2019).



No obstante lo anterior, el máximo tribunal de esta jurisdicción morigeró su criterio jurisprudencial a partir de la sentencia CSJ SL1981-2020, en la que sostuvo que los beneficiarios del régimen de transición, como lo es el caso del demandante, son afiliados del sistema general de seguridad social y, por consiguiente, salvo en lo que respecta a la edad, tiempo de cotización y monto de la pensión, las directrices, principios y reglas de la Ley 100 de 1993 le son aplicables en su integridad “... lo que incluye la posibilidad de sumar todas las semanas prestadas en el sector público, sin importar si fueron o no cotizadas al ISS hoy Colpensiones o, simplemente, no cotizadas, tal como sucede en el asunto” (CSJ SL4529-2020). Bajo esa línea jurisprudencial reiterada, entre otras, en las sentencias CSJ SL2557-2020 y CSJ SL2659-2020, se concluye sin dubitación alguna, que sí es dable contabilizar las semanas laboradas por el señor JOSÉ RAFAEL ECHAVARRÍA VALENCIA en el sector público para efectos de reconocer la pensión por vejez que prevé el Decreto 758 de 1990, criterio que no solo tiene cabida cuando se discute el reconocimiento inicial del derecho, sino que también resulta viable a efectos de obtener el reajuste de la pensión de vejez (CSJ SL1255-2021, SL2283-2021, SL3359-2021, SL5071-2021), abundando razones para confirmar en este aspecto la sentencia apelada y consultada.

Así las cosas, lo procedente es establecer si el señor JAIRO DE JESÚS ARDILA VARGAS acredita los requisitos para causar el derecho al reconocimiento de la pensión de vejez bajo la égida del Decreto 758 de 1990, esto es 60 años de edad y 500 semanas cotizadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, o 1.000 semanas en cualquier tiempo (artículo 12), siendo que en el plenario obra prueba de que el mismo arribó a los 60 años de edad el 25 de octubre de 2010 y que cotizó 1.581 semanas (11.072 días) durante toda su vida laboral (págs.80-87, doc.01, carp.01), por lo que también se confirmará la sentencia de primera instancia, en cuanto declaró que al actor le asistía el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, bajo las previsiones del Decreto 758 de 1990.

**2.3.1.2. De la liquidación de la pensión de vejez:** Para los beneficiarios del régimen de transición que a la entrada en vigencia del sistema de seguridad social integral, estuvieran a más de 10 años de consolidar el derecho a la pensión, el IBL se establece con el promedio de los salarios que sirvieron como base de cotización durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, o el promedio de toda la vida laboral, siempre que el afiliado hubiere cotizado más de 1.250 semanas, y que dicho promedio resulte superior al de los últimos 10 años (artículo 21 de la Ley 100 de 1993), y para quienes les faltaren menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, con el promedio de lo devengado por el afiliado durante el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho, o el cotizado durante todo el tiempo, si este fuere superior (inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993), grupo poblacional respecto

del cual no se contempló la posibilidad de liquidar el IBL con los salarios que sirvieron como base de cotización durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, tal y como lo ha definido de manera uniforme y pacífica nuestro órgano jurisdiccional de cierre (CSJ SL del 15-02-2011, radicado 44238; SL del 17-04-2012, radicado 53037, SL-570 del 06-08-2013, radicado 56460; SL-17476 del 10-12-2014, radicado 45074; SL-2982 del 25-02-2015, radicado 52404; SL-6398 del 27-04-2016, radicado 46343; SL-12709 del 18-07-2017, radicado 54031; SL-4975 del 14-11-2018, radicado 43278, SL-2587 del 08-07-2020, radicado 73921); empero, conviene memorar que en el *sub litium* no se controvierte el IBL liquidado por la entidad demandada en la suma de \$2.045.453 (Resolución 004828 del 09 de abril de 2012 – págs.19-22, doc.01, carp.01).

En lo que respecta al monto o tasa de reemplazo, se memora que en los términos del Decreto 758 de 1990, la pensión de vejez se liquida con base en un monto inicial del 45% y aumentos equivalentes al 3% por cada 50 semanas cotizadas que superen las primeras 500 hasta llegar al 90% por 1.250 semanas cotizadas (artículo 20), y como el actor cotizó 1.581 semanas, la tasa de reemplazo corresponde al 90%, que aplicada sobre un IBL de \$2.196.494, arroja una mesada inicial de \$1.840.908 ( $\$2.045.453 \times 90\% = \$1.840.908$ ), tal y como acertadamente lo estableció la cognoscente de primer grado, razón por la cual se confirmará la sentencia de primer grado en este aspecto.

Ahora bien, la Sala encuentra que sobre las mesadas que se han venido causando, operó parcialmente el fenómeno de la prescripción, en vista de que, desde el 01 de julio de 2011, cuando se hizo efectivo el derecho al disfrute de la prestación, y que corresponde al día siguiente al del retiro del trabajador (págs.19-22, doc.01, carp.01), y hasta el 20 de marzo de 2019 cuando el señor JOSÉ RAFAEL ECHAVARRÍA VALENCIA reclamó el reajuste de la prestación en los términos previstos en el Decreto 758 de 1990, transcurrió con creces el término trienal de que tratan los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS.

En este aspecto puntual, se advierte que la sentenciadora de primera instancia consideró que el término de prescripción se interrumpió con la solicitud de reliquidación que el pensionado radicó el 22 de diciembre de 2016 (págs.23-29, doc.01, carp.01); no obstante, para esta Corporación dicha reclamación no surtió el referido efecto bajo el entendido de que en aquella oportunidad el demandante manifestó: *"De acuerdo con lo anterior, solicito respetuosamente la reliquidación de mi pensión a partir del 2011, de acuerdo a la Ley 33 de 1985, en cuantía mensual de \$3.033.658, más los reajustes de ley para los siguientes años, porque el promedio del salario base del último año laborado en el Departamento de Antioquia y cotizado al ISS es de \$4.044.877"* (Subrayas de la Sala), pedimento ajeno al objeto

de la presente acción, no solo respecto de la normatividad aplicable, sino de la materia objeto de reliquidación, ya que en dicha oportunidad se solicitó el reajuste del IBL, y lo pedido en la demanda es el reajuste de la tasa de reemplazo.

Y como según lo previsto en el artículo 489 del CST, la prescripción se interrumpe con el simple reclamo escrito, acerca de un derecho debidamente determinado (Subraya de la Sala), se colige que una petición que tuvo la vocación producir el efecto al que se viene haciendo referencia (interrupción de la prescripción), fue la radicada el 20 de marzo de 2019, cuando el señor JOSÉ RAFAEL ECHAVARRÍA VALENCIA específicamente solicitó el reajuste de la pensión de vejez, con una tasa de reemplazo del 90%, en aplicación del Decreto 758 de 1990 (págs.49-55, doc.01, carp.01); de allí que, habrá de modificarse en este punto la sentencia apelada y consultada en favor de la entidad demandada.

Así las cosas, COLPENSIONES E.I.C.E. deberá reconocer en favor del demandante, únicamente el mayor valor causado sobre las mesadas pensionales reconocidas a partir del 20 de marzo de 2016, el cual, liquidado hasta 30 de septiembre de 2022, asciende a la suma de \$36.089.625, incluidas las mesadas adicionales de julio y diciembre de cada anualidad, por cuanto la prestación se causó con anterioridad al 31 de julio de 2011, y es inferior a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes (parágrafo transitorio 6º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005). A partir del 01 de octubre de 2022, COLPENSIONES E.I.C.E. deberá seguir reconociendo en favor del demandante, la suma de \$2.787.363 por concepto de mesada pensional, valor sobre el que operan los reajustes y descuentos de Ley.

Finalmente, se advierte que de conformidad con lo previsto en los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, los aportes para el Sistema General de Salud se liquidan con base en el total de los ingresos que el afiliado hubiere recibido durante el periodo reportado, razón por la cual se confirmará la autorización deferida a COLPENSIONES E.I.C.E. para descontar del reajuste pensional dispensado, los aportes para el Sistema de Seguridad Social en Salud.

### **2.3.2. Los intereses de mora y la indexación**

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 prevé que en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago, intereses que por delineamiento jurisprudencial: (i) tienen una naturaleza resarcitoria y no sancionatoria, en consecuencia, la actuación de buena o mala fe no es relevante para su interposición, (ii)

buscan reparar un perjuicio ante la falta de pago total o parcial de la mesada pensional, y (iii) existen salvedades que exoneran de su imposición, siempre y cuando existan razones atendibles al amparo del ordenamiento jurídico vigente al caso decidido, o por aplicación de nuevas reglas jurisprudenciales (CSJ SL-1019 del 03-03-2021, Radicado 86195).

Pese a lo dicho, la jurisprudencia de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que el reconocimiento de dichos intereses no opera de forma automática, sino que se deben estudiar las causas que llevaron a la entidad para negar el reconocimiento de la prestación, y en esa dirección destacó que no resultaba razonable imponer el pago de intereses moratorios cuando la conducta de la administradora estuvo guiada por el respeto a una normativa que de manera expresa regía el derecho en controversia, y en tal sentido, “... no son viables cuando el reconocimiento de la prestación obedece a la creación del criterio jurisprudencial” (CSJ SL-787 del 06-11-2013, Radicado 43.602; SL-8644 del 03-09-2014, Radicado 50529; SL-2941 del 09-03-2016, Radicado 52529; SL-1547 del 18-04-2018, Radicado 67168; SL-4599 del 16-10-2019, Radicado 78109; SL-2414 del 01-07-2020, Radicado 82233).

Dicho lo anterior, la Sala advierte que COLPENSIONES E.I.C.E. se abstuvo de reconocer la pensión de vejez con fundamento en lo normado en la Ley 33 de 1985, la Ley 71 de 1988, el Decreto 758 de 1990, y la Ley 979 de 2003, modificatoria de la Ley 100 de 1993, y que el reconocimiento de la prestación por vía judicial obedece precisamente a la formulación de un nuevo criterio jurisprudencial, de donde yergue imperativa la confirmación de la absolución proferida por dicho concepto, pero habida cuenta que la suma reconocida por reajuste pensional se verá afectada por la devaluación de la moneda, a causa de existir una economía notoriamente inflacionaria, la indexación, pretendida de forma subsidiaria, se constituye en remedio efectivo a la devaluación de la moneda, más si se trata de obligaciones propias del sistema de seguridad social que tienen un notorio carácter alimentario (CSJ SL- 11818 del 08-08-1999, reiterada, entre otras, en la SL-54806 del 06-03-2013), y en glosa de ello, la sentencia de primera instancia habrá de confirmarse en punto a indicar que COLPENSIONES E.I.C.E., deberá reconocer el monto de la obligación debidamente indexado.

Colofón de todo lo anterior, esta Sala confirmará la decisión de primer grado, en cuanto declaró que al señor JAIRO DE JESÚS ARDILA VARGAS le asiste el derecho a que la pensión de vejez reconocida sea liquidada en los términos previstos en el Decreto 758 de 1990, y en cuanto negó el reconocimiento de los intereses de mora, siendo que el reajuste de la prestación dispensado se deriva del desarrollo jurisprudencial sobre la materia; pero se modificará respecto de la fecha en la que la *a quo* entendió interrumpido el término de

prescripción, y en su lugar, se declarará que la única reclamación que tuvo la virtualidad de interrumpirla, corresponde a aquella en la que el actor determinó específicamente cuál es el derecho pretendido, a la par de disponerse la extensión de la condena en concreto.

### 3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 365 del CGP, se impondrán costas en esta instancia a cargo de JOSÉ RAFAEL ECHAVARRÍA VALENCIA, por habersele resuelto desfavorablemente el recurso de apelación propuesto, y con arreglo a lo previsto en el Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, se fijan como agencias en derecho a favor de COLPENSIONES E.I.C.E., la suma de \$ 1.000.000, que corresponde a un (1) SMMLV. No se impondrán en esta instancia a cargo de COLPENSIONES E.I.C.E., teniendo en cuenta que, aunque el recurso de apelación propuesto se le resolvió de forma desfavorable, lo cierto es que la sentencia se analizó integralmente a su favor, en virtud del grado jurisdiccional de consulta surtido. Las costas impuestas en la primera instancia se confirman, por haber sido COLPENSIONES E.I.C.E. vencida en el proceso, atendiendo a lo previsto en el numeral 1º del artículo 365 de CGP.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### 4. RESUELVE

**PRIMERO:** MODIFICAR los numerales segundo y tercero de la sentencia proferida el 06 de junio de 2022 por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por JOSÉ RAFAEL ECHAVARRÍA VALENCIA en contra de COLPENSIONES E.I.C.E., los cuales quedarán del siguiente tenor literal:

**"SEGUNDO:** CONDENAR a COLPENSIONES E.I.C.E. a reconocer y pagar a favor del señor JOSÉ RAFAEL ECHAVARRÍA VALENCIA, la suma de \$36.089.625, por concepto de mayor valor causado sobre las mesadas comunes y adicionales canceladas entre el 20 de marzo de 2016 y el 30 de septiembre de 2022, monto que deberá pagarse debidamente indexado, y sobre el que se autoriza descontar la suma correspondiente para sufragar los aportes al Sistema General de Salud."

**"TERCERO:** CONDENAR a COLPENSIONES E.I.C.E. a seguir reconociendo y pagando a favor del señor JOSÉ RAFAEL ECHAVARRÍA VALENCIA, a partir del 01 de octubre de 2022, la suma de \$2.787.363, por concepto de mesada pensional, monto sobre el cual operan los descuentos y reajustes de ley."

**SEGUNDO:** CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de fecha y origen conocidos.

**TERCERO:** COSTAS en esta instancia a cargo de JOSÉ RAFAEL ECHAVARRÍA VALENCIA, fijándose como agencias en derecho, en favor de COLPENSIONES E.I.C.E., la suma de \$1.000.000, que corresponde a un (1) SMMLV. Sin costas en esta instancia a cargo de COLPENSIONES E.I.C.E. Las costas impuestas en la primera instancia se confirman.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**, acogiendo el criterio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia vertido en el auto AL-2550 del 23-06-2021, radicado 89.628, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

  
VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
Magistrado Ponente

  
MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA  
Magistrada

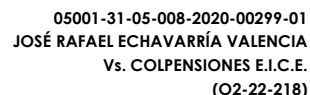
  
SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE  
Magistrada

  
RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS  
Secretario

**CONSTANCIA SECRETARIAL**

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

  
RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS  
Secretario

[illegible]